

Proceso: Ordinario Laboral
Demandante: LISANDRO CELIS BETANCOURT
Demandado: COLPENSIONES.
Consulta: Sent. 06 de febrero de 2017
Rad. 18001-31-05-001-2015-00170-01
Proyecto discutido y aprobado mediante Acta No. 040.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL FAMILIA LABORAL

Magistrado Ponente:
GILBERTO GALVIS AVE

Florencia -Caquetá-, veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023).

Así entonces procede el Tribunal a decidir sobre el grado jurisdiccional de consulta, contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Florencia – Caquetá, el 06 de febrero de 2017, dentro del proceso Laboral Ordinario de Única Instancia de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1 Síntesis de la demanda

El señor LISANDRO CELIS BETANCOURT pretende que se declare que le asiste el derecho al incremento pensional del 14% por tener a cargo a su cónyuge y que la ADMINISTRADORA DE PENSIONES-COLPENSIONES cancele el respectivo retroactivo con la indexación y

los intereses correspondientes a partir del 7 de septiembre de 2000, fecha a partir de la cual le concedieron la pensión.

Fundamenta sus aspiraciones en que: **(I)** el demandante nació el 13 de octubre de 1953 y por ende es beneficiario del régimen de transición que establece el artículo 36 de la ley 100 de 1993; **(II)** el ISS le reconoció la pensión de vejez, mediante resolución No. 0103 del 2011, reconociendo su derecho a partir del 01 de enero de 2011; **(III)** el demandante convive con la señora AMPARO CARVAJAL IBARRA desde años antes de casarse por el rito católico, indicando que su esposa depende económicamente de él; **(IV)** el 30 de mayo de 2014 mediante reclamación administrativa solicitó a COLPENSIONES el reconocimiento y pago del 14% del incremento pensional por su cónyuge, la entidad mediante respuesta de referencia, manifestó mediante Circular Interna No. 1 de 2012 que no es procedente el reconocimiento del incremento.

2. Contestación de la Demanda.

La Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- negó los hechos relacionados con la viabilidad de los incrementos pensionales e indicó que debía probarse la dependencia económica; se opuso a la totalidad de pretensiones incoadas en la demanda, como razones de defensa señaló que los incrementos pensionales no eran aplicables pues al momento en el que se le reconoció la pensión no estaban vigentes las leyes que permitían tal reconocimiento. Interpuso como excepción la que denominó, “prescripción” fundamentada en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo.

3. SENTENCIA

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Florencia Caquetá en providencia del 06 de febrero de 2017, consideró que al demandante no le fue reconocida la pensión en virtud del Acuerdo 049 de 1990 reglamentado por el Decreto 758 de la misma anualidad; pues la prestación económica le fue reconocida de conformidad con el artículo 33 de la ley 100, aunque tangencialmente y en aspectos de menor relevancia se aplicaron los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990; aspectos legales que no guardan relación con el reconocimiento del incremento pensional del 14% solicitado y en virtud de que la mesada pensional reconocida al señor LISANDRO CELIS BETANCOURT fue en cuantía superior a un mínimo legal vigente, lo cual es un requisito para acceder al incremento bajo el citado acuerdo 049, por lo que se extingue este derecho en este caso, pues la citada regulación no establece en su articulado los mencionados incrementos para las personas que recibieran una mesada pensional superior a un mínimo legal vigente y por ésta razón negó las pretensiones.

Por tanto, no ordenó el incremento del 14% por cónyuge a cargo, conforme lo dispone la norma citada por el demandante, dado que no fue el Acuerdo 049 de 1990 el régimen para el reconocimiento de su pensión.

4. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.L. se ordenó el grado jurisdiccional de consulta respecto de la anterior decisión, al haber resultado totalmente adverso a los intereses del afiliado.

5. Alegaciones Finales.

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, hizo uso de la prerrogativa establecida en el numeral 1 del artículo 13 de la ley 2213 de 2022, como se puede observar en los documentos 08 y 09 de la carpeta digitalizada de segunda instancia.

6. CONSIDERACIONES

6.1 Problema jurídico: La controversia gira en torno a determinar, si el señor LISANDRO CELIS BETANCOURT tiene derecho al reconocimiento y pago del incremento de la pensión en un 14% por cónyuge a cargo, contemplado en el Acuerdo 049 de 1990 reglamentado por el Decreto 758 del mismo año.

6.2 Fundamento Jurídico

Del incremento del 14%. El Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en su artículo 21 regula:

“INCREMENTOS DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ POR RIESGO COMUN Y VEJEZ. Las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se incrementarán así:

“a) En un siete por ciento (7%) sobre la pensión mínima legal, por cada uno de los hijos o hijas menores de 16 años o de dieciocho (18) años si son estudiantes o por cada uno de los hijos inválidos no pensionados de cualquier edad, siempre que dependan económicamente del beneficiario y,

“b) En un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o compañero o compañera del beneficiario que dependa económicamente de éste y no disfrute de una pensión.

“Los incrementos mensuales de las pensiones de invalidez y de vejez por estos conceptos, no podrán exceder del cuarenta y dos por ciento (42%) de la pensión mínima legal”.

6.3 Fundamento Jurisprudencial

Sobre el tema de los aumentos previstos en la normatividad citada, tal como lo indicó el Juez A quo, la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en reiterada jurisprudencia, entre ellas el Rad. 21517 del 27 de julio de 2005 y el Rad. 36345 del 10 de agosto de 2010, ha sostenido que los incrementos por personas a cargo previstos en el artículo 21 del Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 0758 de 1990, aún después de la promulgación de la Ley 100 de 1993 mantuvieron su vigencia, esto para quienes se les aplica el mencionado Acuerdo del ISS por derecho propio o transición; esta posición incluso era avalada por la Corte Constitucional, en pronunciamientos de tutela, entre otros, la Sentencia T-318 de 2015.

Sin embargo, la Corte Constitucional en la sentencia de unificación, la SU 140 del 28 de marzo de 2019, volvió a estudiar el tema de los incrementos pensionales, pero esta vez desde el punto de vista de su vigencia y acogiendo algunos argumentos planteados por COLPENSIONES, sobre todo aquellos relacionados con que los mismos no formaran parte integral de la pensión, el alcance del régimen de transición, la sostenibilidad del sistema y aún la perspectiva de género, señaló que la normatividad relativa a esos

incrementos había sido objeto de derogatoria orgánica por la Ley 100 de 1993. Así se pronunció la Corte:

“3.2.15. En fin, para la Corte es claro que el Legislador actuó con apego a la Constitución cuando, a través del régimen de transición que previó el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, protegió las expectativas legítimas de quienes estaban cerca de hacerse a una pensión en las condiciones en que esperaban que esta estuviera bajo el antiguo régimen, sin que tal protección se predicara de otros derechos extrapensionales que, como los que en su momento previó el artículo 21 del Decreto 758 de 1990, carecen de ineludible incidencia en la protección del derecho fundamental a la seguridad social pensional. De lo anterior se desprende que una persona que venía cotizando bajo el régimen pensional anterior a la vigencia de la Ley 100 pero que no llegó a cumplir con los requisitos necesarios para pensionarse en la vigencia de aquel régimen, si bien pudo tener derecho a una pensión en las condiciones del régimen antiguo, definitivamente no tuvo derecho a que aquella fuera favorecida con beneficios extra pensionales que el nuevo régimen definitivamente no contempla”

Luego, como conclusión, se dijo:

“Lo expuesto hasta el momento es suficiente para que la Corte no vacile en sostener que desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, los incrementos previstos por el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 desaparecieron del mundo jurídico y solo conservan efectos ultractivos para aquellos que se hicieron a ellos durante la vigencia de los mismos”.

“Para la Corte es innegable entonces que el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 no produce efecto alguno respecto de quienes hayan adquirido el derecho a pensión con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993; todo ello sin perjuicio de que, con arreglo al respeto que la Carta Política exige para los derechos adquiridos, quienes se hayan pensionado con anterioridad a la

expedición de la Ley 100 y hayan en ese momento cumplido con los presupuestos de la norma, conserven el derecho de incremento pensional que se les llegó a reconocer y de que ya venían disfrutando, siempre y cuando mantengan las condiciones requeridas por el referido artículo 21."

Así las cosas, por tratarse de una sentencia de unificación esta Sala de Decisión acata el precedente jurisprudencial teniendo en cuenta el principio de supremacía constitucional y la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Constitucional que unifican la jurisprudencia, por ser el órgano encargado de interpretar y dar alcance a los preceptos de la Carta Política, tal como se indicó en la Sentencia T-109 de 2019.

6.4 Fundamento fáctico

Descendiendo al caso concreto, con el material probatorio allegado a este asunto, se demostró que el Instituto de Seguros Sociales reconoció la pensión de jubilación por aportes al señor LISANDRO CELIS BETANCOURT, por medio de la Resolución No. 0103 de enero 24 de 2011 como se aprecia en la prueba documental que obra a folios 9-10 del cuaderno N° 1, por lo que no es objeto de discusión que al actor se le reconoció la prestación económica en vigencia de la Ley 100 de 1993.

En ese orden de ideas, la norma que regulaba el beneficio de los incrementos pensionales por personas a cargo, se encontraba consagrado y regulado exclusivamente por el Acuerdo 049 de 1990 reglamentado por el Decreto 758 del mismo año, y por tanto, solo podían acceder a tal prerrogativa quienes hubiesen adquirido su derecho pensional en virtud de la misma disposición tal como lo señala la normatividad; no obstante, en lo que respecta a la Ley 33 de 1985,

que fue con la que se logró pensionar el demandante, no estableció en su articulado el beneficio por el Incremento Pensional, de tal modo que quien haya adquirido su derecho pensional en virtud de ésta disposición no puede solicitar dicho incremento, ni aun habiendo obtenido la prestación en virtud del régimen de transición, lo que sería suficiente para confirmar la sentencia objeto de consulta.

En conclusión, como el señor LISANDRO CELIS BETANCOURT adquirió el derecho a la pensión con posterioridad a la vigencia de la ley 100 de 1993, esto es, a partir del 01 de enero de 2011, no resulta factible acceder a las pretensiones del incremento pensional, por la nueva posición asumida por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-140 de 2019, que aunque es posterior a la emisión del fallo de primera instancia, lo cierto es, que por tratarse de una derogatoria orgánica de ese beneficio y provenir la sentencia de la guardiana de la Constitución, es obligatorio su acatamiento.

Por estos motivos, la sentencia de primer grado emitida el 06 de febrero de 2017 será confirmada.

7. DECISIÓN

Por lo anteriormente expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA, CAQUETÁ, SALA CIVIL FAMILIA LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 06 de febrero de 2017 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Florencia Caquetá, dentro del proceso ordinario laboral de única Instancia propuesto por el señor LISANDRO CELIS BETANCOURT en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de consulta.

TERCERO: Una vez en firme esta decisión; **DISPONER** por la secretaría del Tribunal, la devolución del expediente al juzgado de origen para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GILBERTO GALVIS AVE

Magistrado

MARÍA CLAUDIA ISAZA RIVERA

Magistrada

DIELA H.L.M. ORTEGA CASTRO

Magistrada

Firmado Por:

Gilberto Galvis Ave
Magistrado
Despacho 003 Sala Civil Familia Laboral
Tribunal Superior De Florencia - Caqueta

Maria Claudia Isaza Rivera
Magistrada
Despacho 002 Sala Civil Familia Laboral
Tribunal Superior De Florencia - Caqueta

Diela Hortencia Luz Mari Ortega Castro
Magistrada
Sala 001 Civil Familia Laboral
Tribunal Superior De Florencia - Caqueta

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e658101b67b5a090e6434b2db17787bd017f6ee8de691c416746c6583e03e47d**

Documento generado en 23/06/2023 08:35:42 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>